

# Arreglar el capitalismo digital: Aprender del manual de estrategias de China

Desenmascarar las insinuaciones del Estado chino contra sus propias empresas de alta tecnología.

Por [Anita Gurumurthy](#) y [Nandini Chami](#)

## Breve historia del capitalismo digital

Los últimos años de la década de los 90 fueron un momento álgido para el liberalismo económico. El fin de la historia, con fronteras porosas y comercio sin barreras, estaba a punto de llegar, y parecía que la desigualdad podía superarse. La llegada de la era digital agravó este sentimiento embriagador. En la década de 2000, el libre mercado había encontrado su mejor aliado en las posibilidades de descentralización de Internet. Era una época en la que un puñado de empresas como Amazon habían surgido como supervivientes resistentes de la burbuja puntocom. El motor de búsqueda de Google parecía un regalo para el mundo. Algunos teóricos reconocieron en estas tendencias el nacimiento de un [nuevo capitalismo cognitivo](#) que estaba cercando los bienes comunes de la información para obtener rentas de monopolio. Pero el ritmo y la magnitud de la conquista planetaria del capitalismo digital aún no se habían desarrollado.

Hoy en día, la revolución digital es emblemática de una anomia social generalizada. El aumento de la concentración económica, la profundización de la brecha de ingresos entre el capital y el trabajo, y la desmesurada desigualdad geoeconómica que marca nuestro presente compartido nos indican que el manual de política económica de la [democracia capitalista se ha desmoronado completamente](#). Un burbujeante guiso populista de odio y desinformación también ha hecho que el "derecho a ser dejado en paz", la piedra angular del orden democrático político-liberal, sea bastante anacrónico.

En el mundo occidental, los últimos años han sido testigos de un [aumento de](#)

[las peticiones](#) de medidas reguladoras para frenar a los gigantes digitales. La Unión Europea (UE), impaciente por comenzar su reconstrucción tras la pandemia de Covid, ha iniciado una oleada de [propuestas legislativas](#). En Estados Unidos (EE.UU.) se ha producido un [apoyo bipartidista](#) a favor de la regulación de las grandes tecnologías. Tanto la [UE](#) como [EE.UU.](#) están contemplando también medidas de gobernanza de contenidos para responsabilizar a las plataformas de medios sociales de la desinformación, el discurso de odio y la manipulación del comportamiento.

Mientras tanto, China se apresura a tomar medidas para frenar a las grandes tecnologías. Comenzando con la suspensión de la oferta pública inicial de Ant Group en las bolsas de Shanghái y Hong Kong en octubre de 2020, el Estado chino ha promulgado una serie de leyes y políticas antimonopolio, financieras, de protección de los datos de los consumidores y de gobernanza algorítmica para disciplinar a sus grandes empresas de tecnología nacionales.

## La solución china y lo que la distingue

La respuesta del Estado chino destaca no solo por su rapidez, sino también por su carácter decisivo y, posiblemente, radical. La aventura de China con el capitalismo político ha hecho que el país adopte el sistema de mercado y, lo que es más importante, una cultura de mercado. El aumento de la [desigualdad de ingresos](#), la explotación de los [trabajadores de la economía gig](#), los problemas de supervivencia de las [pequeñas empresas](#), el [sexismo generalizado en la industria de la tecnología](#), la [explotación de los consumidores por parte de las empresas de tecnología financiera](#), todo esto sugiere una cultura de mercado desmedida que comparte mucho con la socialidad impulsada por las grandes tecnologías en otros lugares.

Las severas medidas tomadas por China contra las grandes empresas tecnológicas destacan en tres áreas críticas en las que los gobiernos occidentales siguen vacilando.

## Regular la conducta anticompetitiva de las grandes empresas tecnológicas

Ya en 2018, China introdujo una [ley de comercio electrónico](#) que obligaba a los propietarios de plataformas a distinguir claramente su oferta de la de terceros

(que venden en la plataforma), para no engañar a los consumidores. En agosto de 2021, a través de las [disposiciones de gestión de recomendaciones algorítmicas del servicio de información de Internet](#), la administración reforzó la protección regulatoria para establecer un campo de juego equitativo en el mercado de comercio electrónico, apuntando al uso de sistemas de recomendación algorítmica para el tratamiento manipulador y autopreferente (artículo 13). Al tiempo que instauran estas duras medidas, los reguladores chinos parecen no inmutarse ante la perspectiva de un sentimiento negativo en el mercado de capitales. En junio de 2021, incluso cuando Didi Chuxing, una empresa local, estaba cotizando en la bolsa de Nueva York, los reguladores chinos anunciaron [una investigación](#) contra ella por violaciones de las leyes antimonopolio.

**La falta de medidas reguladoras para pasar de las soluciones conductuales a las estructurales en la ley de la competencia habla de la singularidad del resultado final en el caso de EE.UU.: el cabildeo en el Capitolio por parte de Silicon Valley, combinado con una fijación perenne con el rendimiento del mercado de valores.**

Esto contrasta fuertemente con los Estados Unidos. A pesar de los altibajos de los testimonios públicos de los denunciantes, las audiencias del Senado y la indignación de la sociedad civil, hasta ahora los responsables políticos estadounidenses han tomado pocas medidas concretas para satisfacer los intereses de los consumidores y las pequeñas empresas en el mercado digital. En octubre de 2021 se presentó en la legislatura el [proyecto de ley de innovación y elección en línea de Estados Unidos](#), con mucha fanfarria. Este instrumento legislativo pretende establecer "[reglas de juego de sentido común](#) para las principales plataformas digitales con el fin de garantizar que no puedan preferir injustamente sus propios productos y servicios". Pero nadie sabe si tantos bombos y platillos se traducirán en un impacto real para nivelar el campo de juego. Como ha [destacado](#) la Electronic Frontier Foundation, la versión del proyecto de ley de la Cámara de Representantes tiene una "válvula de escape" en la que las empresas sólo deben justificar por qué los usuarios son dirigidos a sus propias ofertas; no hay una prohibición total de tales prácticas anticompetitivas. La reciente [revelación](#) sobre cómo Amazon ha estafado los productos de terceros vendedores y ha manipulado los resultados de las búsquedas para favorecer sus propios productos en la India, apunta a un abuso

extremo del poder de mercado. Por lo tanto, la regulación debe centrarse en la integración vertical entre el nivel de mercado y el nivel de producto en el comercio electrónico e impedirla. Sin embargo, la falta de medidas reguladoras para pasar de las soluciones conductuales a las estructurales en la ley de la competencia habla de la singularidad del resultado final en el caso de EE.UU.: el cabildeo en el Capitolio por parte de Silicon Valley, combinado con una fijación perenne con el rendimiento del mercado de valores.

## Tomar conciencia del impacto más amplio de las grandes tecnologías en la sociedad

En julio de 2021, los máximos órganos del partido y del gobierno de China (la Oficina General del Comité Central y la Oficina General del Consejo de Estado) anunciaron una nueva e inesperada política que obligaba a las empresas de tecnología educativa y de tutoría extraescolar a volver a registrarse como organizaciones sin fines de lucro. Además, [se prohibió](#) la inversión de capital extranjero en el sector, así como la captación de fondos públicos a través de Ofertas Públicas Iniciales (OPI). La alta valoración de los logros educativos de sus hijos ha hecho que los padres chinos estén dispuestos a pagar mucho por la educación de sus hijos. El floreciente mercado de las clases particulares ha hecho que los [inversores quintupliquen la rentabilidad](#) de las empresas educativas.

Una incursión excesiva e injustificable del mercado en la esfera social es la condición sine qua non del capitalismo digital. El tipo de movimientos regulatorios que se están llevando a cabo en la tecnología educativa china son cambios estructurales que van a suponer un reto organizativo para las nuevas empresas a la hora de adaptar su modelo de negocio. Pero esto también significa que, a largo plazo, habrá menos espacio para las tácticas de quema de efectivo de los primeros que monopolizan el mercado digital a través de prácticas anticompetitivas como los grandes descuentos y los precios abusivos. La innovación podría pasar a crear un valor tanto comercial como social. Como [señaló el Ministerio de Educación chino](#), los enfoques utilitarios con fines de lucro que "el capital se ha apropiado fuertemente" y que "ignoran las leyes de la educación" no son socialmente sostenibles.

En una línea similar, a través de sus nuevas disposiciones sobre algoritmos de recomendación, comentadas anteriormente, el Estado chino también ha intentado abordar de frente los excesos de las plataformas de medios sociales.

Las [directrices](#) prohíben la creación de algoritmos de recomendación que "lleven a los usuarios a la adicción o al consumo de alto valor" (artículo 8), hacen recaer en los operadores de las plataformas la responsabilidad de reducir la circulación de contenidos ilícitos inmediatamente después de su detección (artículo 9) y no permiten la creación de etiquetas de usuario discriminatorias o sesgadas (artículo 10). En septiembre de 2021, los reguladores chinos también tomaron medidas enérgicas contra el [sector de los juegos en línea](#), introduciendo límites en el total de horas de servicio que las plataformas de videojuegos pueden ofrecer a los niños.

**El despliegue sin sentido de la clasificación basada en el compromiso por parte de estas empresas para mantener la circulación de contenidos dañinos, incendiarios o falsos debe ser el foco de la responsabilidad.**

Aunque el jurado no ha decidido cuál es la naturaleza exacta de las políticas y la regulación necesarias para combatir la adicción y el juego en línea, vale la pena recordar que la ingeniería social impulsada por algoritmos es un mal generalizado, con enormes implicaciones para la participación cívica y la razón pública en la democracia. Irónicamente, en las sociedades liberales –a pesar de los fuertes valores sobre la autonomía individual– la respuesta al dilema de las redes sociales ha sido un tanto deslucida. El testimonio de Frances Haugen ante el Congreso de EE.UU. en octubre de 2021 sobre la gestión interna de los contenidos por parte de Facebook [pone de manifiesto](#) por qué las reformas de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EE.UU. no pueden limitarse a responsabilizar a los gigantes de las redes sociales únicamente por los contenidos que publican sus usuarios. El despliegue sin sentido de la clasificación basada en el compromiso por parte de estas empresas para mantener la circulación de contenidos dañinos, incendiarios o falsos debe ser el foco de la responsabilidad. Bajo todo el bombo del apoyo bipartidista a la regulación de las redes sociales, las [fallas políticas](#) siguen desempeñando un papel en el estancamiento de la regulación de los contenidos en línea en los EE.UU. – sin consenso entre los republicanos y los demócratas sobre quién debe ser intimidado, y cómo, por la justicia algorítmica.

En lo que respecta a los algoritmos de recomendación, el proyecto de Ley de Servicios Digitales de la UE ha recibido muchos elogios. La ley exige a las grandes plataformas en línea que sean transparentes en cuanto a los principales parámetros utilizados en dichos algoritmos, que ofrezcan a los

usuarios opciones sencillas para modificarlos y que pongan a su disposición al menos una opción de servicio que no se base en la elaboración de perfiles. Pero como observa la organización mundial de la sociedad civil en su Artículo 19, la legislación [se queda corta a la hora de incorporar medidas](#) para dismantelar el modelo de negocio de la publicidad de vigilancia. La obligación de transparencia de los algoritmos de recomendación podría haberse ampliado a todas las plataformas. Y lo que es más importante, podría haber sido obligatoria para garantizar que los sistemas de recomendación no basados en la elaboración de perfiles sean la opción por defecto de todos los servicios de las plataformas.

La [propuesta de Ley de Inteligencia Artificial de la UE](#) intenta abordar esta laguna, instituyendo una prohibición explícita a los sistemas de recomendación algorítmica "diseñados o utilizados de manera que manipulen el comportamiento, las opiniones o las decisiones humanas [...] haciendo que una persona se comporte, se forme una opinión o tome una decisión perjudicial para sí misma". Sin embargo, como observa Ansgar Koene, estudioso europeo de la ética de la IA, en una entrevista con los autores, la aplicación de esta disposición en la práctica puede ser complicada, "dado que la modificación del comportamiento es el objetivo de toda la publicidad, ¿cómo se puede determinar el umbral a partir del cual ese empujón se convierte en perjudicial"? Además, en su análisis final, Ansgar agrega que "dado que la UE siempre intenta ser partidaria de la globalización y de la apertura de los mercados, al tiempo que contrarresta las excesivas fuerzas del mercado que se derivan de los efectos de la red", es probable que, lamentablemente, la ley conceda el beneficio de la duda a las empresas de medios sociales.

### Intervención política para abordar la desigualdad social

Durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, la papeleta de California incluyó un [referéndum llamado "Proposición 22"](#) (Prop 22), apoyado por empresas como Uber, DoorDash y Lyft. Las empresas de transporte terrestre gastaron más de 200 millones de dólares en bombardear a los votantes californianos con correos electrónicos, folletos, mensajes de texto y anuncios de vídeo en los que se afirmaba que la proposición era justa para los conductores de la economía gig. Más del 58% de los votantes californianos respaldaron la Proposición 22, que clasifica a los conductores de estos servicios como contratistas. La Proposición 22, un ejemplo de la complacencia del gran capital, refleja la deslegitimación histórica de los derechos de los trabajadores en EE.UU., socavando, en este caso, las prestaciones de salud y seguridad y de

protección social de los trabajadores de la economía gig. En cambio, la UE siempre se ha posicionado como abanderada de los derechos laborales. Sin embargo, los [estudios](#) realizados en la UE apuntan a un aumento de la desigualdad dentro de los países, derivada de la distribución desigual de los beneficios del desarrollo económico, vinculada a la reducción de las inversiones en protección social, salud y educación desde 2009. La reciente [investigación](#) de McKinsey sobre el futuro del trabajo en la UE sugiere que la revolución digital y los efectos de la pandemia aumentarán la concentración geográfica del crecimiento del empleo en unos pocos centros, dejando a los trabajadores poco calificados con pocas opciones en el mercado laboral. Desafortunadamente, la UE no parece tener un verdadero plan de juego para abordar esta situación. Como observó, de forma bastante condenatoria, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza, Olivier de Schutter, "el Acuerdo Verde no es un sustituto de una estrategia de erradicación de la pobreza [...] a pesar de su ambición, no llega a cuestionar el marco de la política macroeconómica en el que opera la UE".

El capitalismo de alianza de China, respaldado por el Estado, ha tenido su cuota de problemas en la gestión del antagonismo fundacional entre el capital y el trabajo. Aunque los sindicatos independientes no están permitidos en China, la creciente visibilidad de la amplia explotación laboral en el país ha producido [una crisis de legitimidad](#) para las autoridades y ha forzado su mano. En julio de 2021, siete organismos gubernamentales de China [promulgaron conjuntamente directrices](#) que ordenaban a las plataformas de reparto de comida en línea que ofrecieran un salario mínimo con seguridad social a sus trabajadores gig, en respuesta a la creciente opinión pública contra los explotadores acuerdos laborales de las plataformas. Esto podría descartarse como una medida para evitar el malestar social. Pero en lo que China destaca es en su compromiso declarado con una visión alternativa del desarrollo económico.

**Puede que China no haya agotado todas las opciones de justicia económica, pero su historial de alivio de la pobreza inspira cierta esperanza para el futuro. Si bien los ingresos de los estadounidenses más pobres han disminuido desde 1980, los ingresos de los ciudadanos chinos se han disparado.**

A principios de 2021, el [presidente Xi Jinping abogó](#) por volver a la visión económica de "prosperidad común" de épocas anteriores para "abordar

adecuadamente la relación entre eficiencia y justicia". La gran cantidad de regulaciones introducidas el año pasado para frenar el capitalismo digital fuera de control puede interpretarse como [un paso en este proyecto más amplio](#) para "reequilibrar la economía hacia el trabajo, abordando la desigualdad social con redistribución, bienestar social, impuestos y educación inclusiva". Puede que China no haya agotado todas las [opciones de justicia económica](#), pero su historial de alivio de la pobreza inspira cierta esperanza para el futuro. Si bien los ingresos de los estadounidenses más pobres han disminuido desde 1980, [los ingresos de los ciudadanos chinos](#) se han disparado.

## ¿Por qué los países en desarrollo deben mirar a China?

Todo el mundo está de acuerdo en que las grandes empresas tecnológicas necesitan un freno. Sin embargo, la diferencia está en la naturaleza exacta de la tregua con el mercado. Actualmente, la carrera por el desarrollo gira en torno a las infraestructuras de plataformas nacidas en el ámbito privado y gestionadas por las grandes tecnologías. La pandemia fue un momento aleccionador, pero la recuperación tras ella se basa en gran medida en conseguir una parte de la creciente economía digital. Esto, según todas las medidas, implica aprovechar los recursos de los datos y de la IA dependiente de los datos, ambos controlados por los gigantes corporativos.

EE.UU., que ya controla una gran parte de la economía digital, está listo para inaugurar una nueva frontera imperial. La UE se prepara para reclamar con firmeza su tecno-soberanía. Las empresas europeas pueden haber perdido el juego del comercio electrónico y las redes sociales en favor de las estadounidenses, pero Europa apuesta por su destreza analítica y en la nube – una parte crucial de la cadena de valor de los datos– para conseguir su parte del pastel. Un futuro digital en los términos de Europa se basará en desbloquear el valor de los datos a través de una arquitectura federada basada en la nube, gestionada en asociación con Google (por paradójico que sea).

Pero las ambiciones de Europa van mucho más allá. En un mundo que funciona con datos como materia prima, el poder económico depende de ser el depredador, asegurando el acceso a más y más datos. Por ello, la UE y EE.UU. han utilizado los acuerdos comerciales para impulsar la hiperliberalización de los mercados de comercio electrónico y los flujos de datos transfronterizos en busca de canales permanentes para fortalecer su futura ventaja digital. Estos esfuerzos por integrar rápidamente a los países en desarrollo en condiciones adversas a la economía digital se basan en un dualismo evidente: mi-mina de

datos y tu-mina de datos.

Esto nos lleva a China, la némesis de Estados Unidos en el juego de los datos y la IA. Tras embarcarse en un viaje por Internet por su cuenta, que ha dado lugar a la marca exclusiva china de la economía de plataforma, la localización de datos del país ha sido un producto típico de sus [preocupaciones en torno a la ciberseguridad y la soberanía de Internet](#). China ha [mantenido](#) que las leyes nacionales deben dictar la regulación de los flujos de datos. Así, el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales de China representa una tercera vía entre el enfoque sectorial específico y fragmentario de Estados Unidos y el exhaustivo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, que consagra derechos fundamentales en todos los contextos. Con el proyecto de ley, el [régimen de gobernanza de datos](#) en evolución de China hace hincapié en la privacidad de los consumidores, al tiempo que prioriza la seguridad nacional a través de medidas de localización de datos y restricciones al flujo de datos transfronterizos.

Esto no es un elogio acríptico de los datos chinos y de los enfoques de la política digital. Se trata más bien de un llamamiento contra la detracción impulsiva de la compleja economía política de los datos, firmemente arraigada en un orden neoliberal de digitalización y mercantilización de todos los aspectos de la sociedad humana. Los países en desarrollo se ven obligados a reaccionar ante las estratagemas y los caprichos políticos de EE.UU. y la UE para subirse al carro de la economía digital, sucumbiendo, lamentablemente, a marcos institucionales que simplemente no están diseñados para salvaguardar los intereses de sus propios ciudadanos. Esta contradicción geopolítica refleja la falacia de las oportunidades ilimitadas que promueven implacablemente los proveedores del capitalismo digital.

Los poderes de vigilancia y de aplicación de la ley que se arroga el Estado chino siguen siendo preocupantes, ya que son antitéticos a la libertad cívica. Sin embargo, convertir a China en el viejo de la bolsa de la vigilancia gubernamental perjudica las cuestiones clave de la gobernanza de las grandes tecnologías, la democracia y los derechos humanos. En primer lugar, legitima las [narrativas occidentales a medias](#) sobre la ingeniería social china, convirtiendo de forma simplista programas como el crédito social, que se centran principalmente en los comportamientos empresariales y los impulsan, en un conveniente encubridor sobre una distopía totalitaria. De hecho, a lo largo de la pandemia, el Estado chino empleó modelos de evaluación de riesgos aprovechando sus datos de crédito social para medir la viabilidad de los

préstamos con el fin de alentar a los bancos a ofrecer un mayor [acceso a los préstamos para las PYME](#). En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el alarmismo liberal sobre China oscurece la universalidad de los excesos estatales bajo el capitalismo digital. Desde las revelaciones de Snowden hasta Cambridge Analytica y la más reciente, el Proyecto Pegasus, es más que evidente que un orden global de datos requiere un régimen internacional para la gobernanza de los datos que pueda garantizar normas en las prácticas de vigilancia atentas a la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y los derechos de reparación individual.

**Convertir a China en el viejo de la bolsa de la vigilancia gubernamental perjudica las cuestiones clave de la gobernanza de las grandes tecnologías, la democracia y los derechos humanos.**

Lo que el activismo liberal de los derechos digitales parece pasar por alto es el imperativo más que urgente de mirar hacia Occidente en busca de las previsibles lecciones de la historia sobre la colonización; esta vez, por la vía de los datos. Como [sostiene](#) Walden Bello, demonizar la iniciativa china "Belt and Road" puede hacer que no se entienda el imperialismo occidental. En efecto, las libertades políticas no están en juego en la búsqueda de la estabilidad social. Pero, al mismo tiempo, tampoco hay que dejar de lado las no-libertades de privación de capacidades -de las naciones y los pueblos- en la época de los datos aparentemente libres.

En los años 90, la inmensa miseria resultante del dogma neoliberal -impuesto a los países en desarrollo a través del infame [consenso de Washington](#) - estableció claramente los límites del mercado. El desarrollo no se filtraba con la desregulación del mercado, la privatización y la liberalización del comercio. Luego llegó el capitalismo digital, con sus excesos arrogantes. Nadie sabía que la promesa de Internet sería el triunfo definitivo del capital.

Hoy en día, en todo el mundo en desarrollo, a medida que los países se apresuran a digitalizarse, se ven obligados a enfrentarse a un nuevo momento neoliberal; un dogma de comercialización de "ahora o nunca". El manual de política digital de China muestra que hay, y puede haber, diversas vías para repensar el desarrollo en la era digital. Es innegable que cada país debe calibrar su propio cálculo costo - beneficio para decidir la mejor manera de integrarse en el orden digital

mundial. Esto no tiene por qué ser un ejercicio de suma cero de acomodarse o

perecer. La vía china es un camino político plausible para que los Estados nacionales contengan la Gran Tecnología, trabajen hacia políticas proactivas para gobernar y construir infraestructuras de datos y de IA, y den prioridad a la igualdad socioeconómica. Sin duda, la justicia digital depende de un nuevo orden institucional internacional basado en los derechos humanos, la justicia social y el estado de derecho. Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese punto, pero lo que está bastante claro es que necesitamos mucho más que las soluciones clásicas del liberalismo para estar a la altura de los retos del capitalismo digital.

---

### Sobre la(s) autora(s)

**Anita Gurumurthy:** Anita Gurumurthy es miembro fundadora y directora ejecutiva de IT for Change, donde dirige colaboraciones y proyectos de investigación en relación con la sociedad de redes, centrándose en la gobernanza, la democracia y la justicia de género.

**Nandini Chami:** Nandini es la directora adjunta de IT for Change. Su trabajo se centra principalmente en la investigación y la promoción de políticas en los ámbitos de los derechos digitales y el desarrollo, y la economía política de los derechos de las mujeres en la sociedad de la información. Forma parte de los esfuerzos de promoción de la organización en torno a la agenda de desarrollo 2030 en cuestiones de "datos para el desarrollo" y tecnologías digitales y justicia de género.

---